

## Una Agenda 2000 de la izquierda

Carlos Carnero

Me gustaría, antes que nada, felicitar a la Fundación Sistema por la organización de este XIII Encuentro Sobre el Futuro del Socialismo.

Un Encuentro cuya celebración merece, desde mi punto de vista, una consideración extraordinariamente positiva, esencialmente por dos razones:

— por representar un foro privilegiado y prácticamente único en España para el intercambio de opiniones y propuestas de y entre la izquierda política y social, y

— por su oportunidad temporal, por su actualidad.

Salta a la vista de cualquier observador la inexistencia, sin duda lamentable, de marcos de reflexión común entre las fuerzas del cambio en nuestro país. No estaría mal que empezáramos a extraer conclusiones de experiencias que van precisamente en un sentido opuesto, como la que día a día se está desarrollando en Francia.

Además, salimos de un año —1997— importante en Europa y en España y vamos a entrar en otro cargado de potencialidades y acontecimientos:

— en el plazo de seis meses, PSOE e IU han celebrado respectivamente su Congreso y su Asamblea Federal, en el primer caso procediendo a un cambio en el máximo liderazgo y en el segundo dando continuidad a una etapa marcada por la crisis, la pérdida de apoyos y el retroceso político; todo ello sin olvidar los primeros pasos autónomos de un tercer proyecto, representado entre otros por Nueva Izquierda e Iniciativa per Catalunya;

— vamos a cruzar el ecuador del primer cuatrienio de la derecha en el Gobierno;

— los vientos han empezado a cambiar en los principales países europeos con las victorias electorales del nuevo laborismo en el Reino Unido y de la izquierda plural en París, algo que puede completarse el próximo otoño con un triunfo de la socialdemocracia en Alemania;

— la construcción europea inicia una etapa decisiva que girará en torno a la entrada en vigor de la moneda única y el comienzo de la más ambiciosa de las ampliaciones llevadas a cabo en su historia.

Se impone, por tanto, pensar en común para intervenir en común sobre un marco de referencia tan fluido como el apuntado.

Y para ello es imprescindible conseguir algo hasta ahora desconocido en este país: que los grupos dirigentes de las izquierdas se abran mutuamente las puertas y se comprometan a hacer lo mismo respecto al debate ciudadano.

En 1999 afrontaremos una cita de relevancia: elecciones municipales, autonómicas en trece comunidades y europeas.

Una victoria de la izquierda en esos comicios, particularmente en los dos primeros, significaría recuperar importantes espacios de gobierno desde los que, además, encatar el reto de las próximas elecciones generales, tengan lugar en el 2000 o sean convocadas de forma anticipada.

Las fuerzas progresistas deberían ser capaces de identificar terrenos de colaboración en los que articular propuestas e iniciativas que respondan con credibilidad a las actuaciones conservadoras e ilusión a la mayor parte de la sociedad.

En ese sentido, creo que hay un gran y al mismo tiempo inexplorado espacio de debate y acción compartida para las izquierdas en el ámbito de la política exterior y las relaciones internacionales.

Debemos partir de la base de que, hoy más que nunca, el tener en cuenta como factor condicionante el marco mundial es insoslayable para ulteriores actuaciones de nivel nacional, desde el que, a estas alturas, es sencilla y llanamente imponible afrontar en solitario la solución de los grandes problemas de fin de siglo.

Por lo tanto, me permito apuntar un *primer objetivo del socialismo: construir un nuevo orden internacional democrático.*

El fin de la «guerra fría» como consecuencia del estrepitoso hundimiento de los sistemas autoritarios del Este de Europa abrió hace casi una década un proceso de transición hacia un orden internacional distinto al imperante desde 1945.

Esa transición está dominada por dos grandes tendencias de fondo:

- la mundialización en lo económico y lo social,
- la unipolaridad en lo político y lo militar.

En el contexto de esas dos corrientes, se produce una serie de fenómenos significativos, entre los que podríamos citar los siguientes:

- la relativización del derecho internacional y de los poderes de instituciones como las Naciones Unidas,
- el surgimiento de nuevos conflictos regionales y el enquistamiento de algunos fundamentales,
- la profundización de la brecha entre el Norte y el Sur, con un aumento exponencial de la pobreza en su sentido más amplio,
- la continua degradación del medio ambiente.

Como es lógico, en el marco de esa transición inacabada se han producido hasta la fecha muchos acontecimientos, algunos positivos y otros negativos que van, por ejemplo, desde el fin negociado del *apartheid* en Sudáfrica o la puesta en marcha del ahora bloqueado proceso de paz en el Próximo Oriente, en el debe, hasta la Guerra del Golfo o la catástrofe acaecida en la región africana de los Grandes Lagos, en el haber.

Además, siguen dominando las políticas neoliberales, algo que se expresa, por ejemplo, en las posiciones hegemónicas de organismos como el Fondo Monetario Internacional y sus planes de ajuste, pero también en sus consecuencias, entre las

que podrían citarse las crisis financieras en diversas regiones del Globo, la última de ellas en Asia.

Se trata, por lo tanto, de un conjunto de pasos hacia adelante y pasos hacia atrás propios de un Mundo contradictorio cuyo futuro inmediato, al menos en el nivel de las relaciones internacionales, no está todavía escrito y en cuya configuración definitiva es posible y, sobre todo, necesario, tratar de intervenir activamente.

La izquierda tiene que plantearse influir para, a corto plazo, relativizar el unipolarismo deseado y, en cierta medida, ejercido por los Estados Unidos, en el ámbito de lo político, y reorientar en un sentido social el proceso de mundialización, en el terreno de lo económico y social.

Los progresistas no pueden quedarse al margen de la evolución que vive el Planeta tras la caída del Muro de Berlín, algo que puede materializarse por dos vías, igual de erróneas: asumir acríticamente lo existente o rechazarlo de plano sin alternativa.

Bien al contrario, hay que trabajar en el sentido de configurar una nueva situación en la que aumenten sustancialmente el poder de intervención pública —que no es sinónimo necesariamente de estatal—, la capacidad de gobierno político, el porcentaje de regulación y el control democrático a nivel internacional.

Una nueva situación en la que terminen siendo predominantes estrategias distintas a las neoliberales, con las que romper el totalitarismo representado por el «pensamiento único», intervenir en la mundialización para en una primera etapa maximizar sus beneficios y minimizar sus costes y cuestionar, por así decirlo, la unipolaridad perseguida por los Estados Unidos.

En ese marco, mi propuesta es que pudiera formularse una especie de «Agenda 2000 de la izquierda».

Los interrogantes de esa Agenda: cuáles serían sus objetivos, cómo alcanzarlos y con quién aplicarlos, marcando metas factibles y entronizando paulatinamente correlaciones de fuerzas favorables para conseguirlos.

Los grandes fines: se trata de democratizar a fondo las relaciones internacionales, algo que sólo será factible a través de la puesta en marcha de un *multilateralismo* horizontal y vertical que permita a una multitud de actores —organizaciones internacionales (empezando por la ONU), estados, grupos de países, y entidades políticas, no gubernamentales y ciudadanas de todo tipo— ser sujetos en los procesos de toma de decisiones que afecten al conjunto del Planeta.

Desde esa perspectiva, podrían establecerse ciertos objetivos:

— crear o fortalecer diversos centros de influencia política que acaben con la «soledad unipolar norteamericana» en la gestión de los asuntos internacionales;

— elaborar —consiguiendo su asunción— un «código de conducta» que, sobre la base de la diplomacia preventiva y del reconocimiento del derecho y del deber de injerencia, permita encarar la solución de los conflictos dejando a las vías militares el papel de último recurso para, sobre la base de decisiones adoptadas democráticamente por la Comunidad Internacional, gestionar crisis, mantener la paz o practicar la ayuda humanitaria;

— la extensión de los principios democráticos y del respeto de los derechos humanos, que han de ser considerados como universales, indivisibles e inter-

dependientes; en este terreno, conseguir la creación de un Tribunal Penal Internacional independiente, con capacidad de iniciativa propia y amplia jurisdicción prevista en la Conferencia Diplomática que se celebrará en Roma el próximo verano, constituiría un elemento imprescindible frente a la impunidad y de garantía de castigo a los culpables de crímenes contra la Humanidad, crímenes de guerra y genocidio;

- el desarme nuclear y convencional;
- reformar democráticamente las Naciones Unidas, aumentando su capacidad de actuación y su papel de garante del derecho internacional;
- reorientar las políticas del FMI y del BM en un sentido social y no de ajuste;
- establecer mecanismos de regulación e imposición fiscal de los flujos financieros internacionales, promoviendo la economía productiva;
- revisar las consecuencias de la OMC e impedir la aprobación en su concepción actual de proyectos como el AMI (Acuerdo Multilateral de Inversiones);
- fortalecer la cooperación regional, extendiendo la dinámica económica y comercial a todos los niveles y multidireccional;
- reducir la distancia entre el Norte y el Sur, potenciando nuevas y justas relaciones económicas y comerciales y políticas suficientes de cooperación orientadas a la lucha contra la pobreza y la promoción de modelos de desarrollo sostenible;
- la defensa del medio ambiente como condición simplemente necesaria para cualquier otra perspectiva;
- impulsar las políticas de igualdad como prioridad, empezando por las relativas a los derechos de la mujer.

No me resisto en este punto a hacer un breve comentario sobre lo que está ocurriendo con uno de los temas arriba citados porque se trata, seguramente, de uno de los más claros ejemplos de las consecuencias que acarrea la existencia de un orden internacional desregulado y, en muchos de sus aspectos, opaco.

Desde hace tiempo, los gobiernos de los estados miembros de la OCDE negocian el establecimiento de un AMI que supondría, de llegar a adoptarse en los términos del texto actualmente conocido, una desregulación salvaje que terminarían eliminando las legislaciones existentes de protección de los derechos sociales o del medio ambiente y debilitaría sensiblemente los propios sistemas políticos democráticos nacionales.

Hablamos de un hipotético Acuerdo que significaría, entre otros elementos, el desmantelamiento sin posible retorno de cualquier sistema legal que se entendiera como un obstáculo para la libre circulación de capitales en el extranjero, la laminación de cualquier sistema de salvaguardia social, cultural o medioambiental que las obstaculizara y, además, en tanto que tratado internacional, la posibilidad de que los inversores pudieran llegar a demandar a un Estado si consideraran lesionados sus réditos, por poner un caso, por una huelga legalmente convocada por los sindicatos, todo ello sin la posibilidad inversa.

Tamaño barbaridad está suscitando numerosas oposiciones, como la expresada recientemente desde el Parlamento Europeo por amplia mayoría, demandando a los gobiernos y los legislativos de los países comunitarios que en ningún caso den su visto bueno al AMI en su redacción presente.

Para conseguir los objetivos arriba reseñados, son tres los actores con quienes influir:

- a) las políticas exteriores de los Gobiernos (la democracia sigue estando situada esencialmente a nivel del estado-nación),
- b) las instancias y estructuras internacionales de la izquierda política y sindical,
- c) las sociedades civiles, incluyendo en ellas a las Organizaciones No Gubernamentales y los movimientos sociales progresistas.

No debemos olvidar, además, que en los últimos años se registra el surgimiento de una nueva diplomacia, la de los ciudadanos, que ha empezado a manifestarse con motivo de las Conferencias Mundiales organizadas por las Naciones Unidas sobre varios temas y ha cosechado hasta el momento éxitos como el registrado con motivo de la elaboración del Tratado de Prohibición de Minas Antipersonales.

En efecto, la opinión pública ha adquirido progresivamente una cada vez mayor conciencia colectiva sobre la importancia de los asuntos internacionales para la misma vida cotidiana y, por lo tanto, se hace cada vez más presente en los mismos. La percepción de lo global, con la revolución en las comunicaciones, ha dejado de ser patrimonio de grupos de expertos y diplomáticos para pasar a ser compartida por la gran mayoría de los ciudadanos.

Ciudadanos que, al mismo tiempo, han hecho suyo un código de valores que incluye entre sus prioridades incuestionables la defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos integralmente considerados.

La confluencia de esa conciencia acrecentada y de ese código de valores ha terminado significando una mayor presión sobre los gobiernos por parte de las gentes de a pie, especialmente sensibilizadas en lo que se refiere a los conflictos bélicos y las catástrofes humanitarias, de forma que ningún gobierno de los principales países democráticos puede adoptar sin costes políticos respecto a su propia opinión la «táctica del avestruz» frente a hechos que son percibidos por la sociedad bien como tocantes a sus intereses a plazo bien como motivo de agresión para su escala de valores (particularmente en Europa).

Así, los medios de información vehicular y transmiten (fomentándolas en muchos casos, manipulándolas en algunos) reacciones muy mayoritarias de la ciudadanía, que se vuelve hacia el Ejecutivo correspondiente preguntando «¿y nosotros qué vamos a hacer para evitarlo o para solucionarlo?», como pusieron de manifiesto Bosnia, Ruanda o Argelia.

Los ciudadanos han hecho también suyas en ese punto nociones como diplomacia preventiva, derecho de injerencia, ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo y rechazo del «doble rasero», demandando a los Gobiernos su aplicación y admitiendo que el país pague un coste o asuma un riesgo participando, por ejemplo, en operaciones de mantenimiento de la paz.

Las organizaciones no gubernamentales no son ajenas a ese fenómeno, que desde mi punto de vista constituye uno de los más positivos aspectos a subrayar en los últimos años en países como España.

Pero en el contexto de mundialización y globalización existe un marco privilegiado de intervención, la Unión Europea, en tanto que construcción única a nivel internacional que abre unas posibilidades de participación democrática extraordinariamente importantes.

Es ahí precisamente donde situaría *el segundo objetivo del socialismo a nivel internacional: fortalecer y, a tal fin, reorientar el proceso de construcción europea para, desde él y con él, poder intervenir en esa transición hacia un nuevo orden internacional democrático.*

Desarrollar la Unión Europea (UE) significa, al mismo tiempo, incrementar las oportunidades de influir en la dinámica de la mundialización desde un plano privilegiado. De hecho, las posibilidades de presencia y actuación que, en el marco de la UE, se abren para las fuerzas progresistas europeas en ese ámbito superan con mucho los límites que permite la capacidad de intervención nacional y no tienen parangón en ningún otro lugar del planeta.

Es por ello que el socialismo debe subrayar su inequívoca apuesta por la unidad europea, por llevarla hasta sus últimas consecuencias, algo de lo que será incapaz la derecha a pesar de haber dominado el proceso durante largos períodos.

La Unión Europea debe y puede ser uno de los principales protagonistas de una *intervención multilateral* con la que establecer aquel nuevo orden internacional democrático en el que se puedan encontrar soluciones correctas a los principales retos y problemas de la Humanidad.

Y la izquierda europea debe promover que la UE juegue ese papel sin complejos, sin autocensuras, apurando las enormes capacidades potenciales derivadas de ser, en términos políticos, el mayor espacio democrático existente y, en lo económico, la más importante potencia del Globo.

En la nueva coyuntura política que se abre paso en los países comunitarios, con ese giro a la izquierda que se va extendiendo paulatinamente, las fuerzas progresistas tendrían que marcarse algunas metas básicas para el próximo decenio:

- hacer avanzar el proyecto de unión política, demandando una nueva forma institucional que precediera a cualquier nueva ampliación y que pusiera fin al déficit democrático en la perspectiva de convertir a la Unión en una «federación de naciones y de ciudadanos»;

- culminar el ingreso de los Países de Europa Central y Oriental y Chipre evitando la conversión de la UE en una mera zona de libre cambio —de ahí la importancia de la reforma institucional previa y también de reivindicar como vigente el binomio profundización/ampliación— y que la carga del proceso (que presenta al tiempo una oportunidad política y un deber moral) recaiga sobre los países menos desarrollados a través de un debilitamiento de las políticas e instrumentos de solidaridad interna;

- promover que la introducción del «euro» —algo que ya nadie cuestiona como una positiva realidad— vaya acompañada de al menos un empujón de gobierno económico de la Unión y de una verdadera política social y de empleo;
- establecer una auténtica ciudadanía europea sobre la que edificar un espacio compartido y cada vez más amplio de derechos y libertades;

- proyectar una verdadera Política Exterior y de Seguridad Común (PESC);
- actuar de forma sensiblemente distinta a la actual en el seno de instancias como el FMI o la OMC;

- situar como indispensable una política de cooperación al desarrollo cuantitativa y cualitativamente adecuada a los grandes retos planteados por la pobreza y la situación del Tercer Mundo.

Me gustaría detenerme un poco en una de esas metas, que estimo esencial y propia de la izquierda: la PESC.

La UE, que dentro de pocos años tendrá como miembros en su seno a la gran mayoría de los países europeos a través de un histórico esfuerzo de ampliación a los Países de Europa Central y Oriental y a Chipre, constituye un conjunto cada vez más homogéneo que comparte valores e intereses comunes pero que, sin embargo, no ha sido capaz de perfilar definitivamente el instrumento que le permite promoverlos y defenderlos de manera eficaz.

Ese instrumento no puede ser otro que una verdadera PESC que, como rasgo esencial de una futura unión política, permita a la Unión alcanzar varios objetivos, entre los que podría citarse la construcción de aquel nuevo orden internacional democrático y el mantenimiento y consolidación de la paz en el conjunto del continente.

Como los propios hechos se han encargado de demostrar en la década de los noventa, la PESC contenida en los Tratados de Maastricht y de Amsterdam ha sido insuficiente para que la UE estuviera en condiciones de encarar los desafíos de la seguridad en los planos internacional y europeo.

Así lo perciben los ciudadanos cuando hacen balance de lo ocurrido —por recordarlo algunas coyunturas— en Bosnia, Albania o el Medio Oriente.

La Unión necesita una auténtica PESC, sí, pero también precisa que los Gobiernos de los Estados miembros tengan la voluntad política de crearla, dotarla de medios suficientes, aplicarla y considerarla como una vía multiplicadora de su acción internacional a la que subordinar cada una de las políticas exteriores nacionales.

Hablamos de una PESC plenamente integrada en el «pilar comunitario», que se vea atada por el vigente carácter intergubernamental, y en la que instituciones como la Comisión Europea y el Parlamento de Estrasburgo ejerzan amplias capacidades de iniciativa, gestión y control.

Una política así sería plenamente útil para la diplomacia preventiva, la gestión de crisis, el mantenimiento de la paz y la ayuda y la injerencia humanitaria, conceptos clave para impedir la guerra y promover y defender unos derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes.

Ahora bien, si no deseamos hacer bueno el refrán que dice «en casa del herrero, cuchillo de palo», hemos de subrayar que la PESC tiene que plantearse, ante todo, preservar la paz en Europa, amenazada por conflictos desconocidos hasta hace poco tiempo, muchos de ellos de carácter intraestatal, como los que hunden sus raíces en los problemas de las minorías: Kosovo es su última expresión.

Se hace urgente crear un modelo pan-europeo de seguridad en el que la UE —dotada de la PESC—, junto con instancias como una Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) plenamente renovada en competencias y capacidad de adopción de acuerdos, sería fundamental.

Un modelo en el que la seguridad del continente no quedaría principalmente en manos de una potencia extrarregional como los Estados Unidos porque se garantizaría por los propios europeos.

Por supuesto que hablamos de una seguridad compartida, basada en el diálogo, integral, de una seguridad humana.

Y no se trata, desde mi punto de vista, de plantear una ausencia de cooperación entre la UE y Norteamérica, sino de establecer un nuevo equilibrio que, a medio plazo, signifique que Washington no ejercería la actual hegemonía en el entramado de la seguridad europea.

Tampoco pienso que el debate pase, a estas alturas, por un «OTAN, sí» *versus* un «OTAN, no» fuera de la agenda política.

La Alianza Atlántica, reforzada y ampliada por decisiones de la Cumbre de julio de 1997 en Madrid, seguirá reclamando ser *la única* estructura de seguridad en Europa mientras la UE no diseñe y haga funcionar sus propias vías de actuación, empezando por una PESC que cuenta con una política de defensa común.

Política de defensa común que pasará por la integración de la UEO en la UE y la coordinación de las fuerzas armadas de los estados miembros para la realización de las conocidas como «misiones Petersberg»: gestión de crisis, mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria.

De existir una PESC como la descrita, qué duda cabe de que la relación Estados Unidos-UE en los temas de seguridad sería cada vez más igualitaria y, entonces sí, podrían proyectarse verdaderos procesos de europeización de la OTAN que posibilitaran una evolución en positivo de su carácter de fondo, porque ya no estaríamos hablando de la misma Alianza surgida de la noche del enfrentamiento bipolar.

La izquierda, pues, debe tener como una señal característica de su identidad un «europeísmo» crítico y constructivo, y no por razones *inocentes* o caídas del cielo, sino por argumentos de absoluto pragmatismo.

En ese contexto, la izquierda española tendría que ser capaz de dialogar sobre el tema europeo, no aceptando el *a priori* de su divergencia en torno a él. ¿Por qué convertir los asuntos relativos a Europa en temas tabú o en indiscutibles asuntos de discrepancia?

El PSOE debería completar su discurso europeo con una mayor y más profunda perspectiva crítica sobre la evolución y perspectiva del mismo.

Y, por descontado, sería imprescindible que IU se decidiera a entrar de una vez en el debate europeo real, en el que se pueden solucionar los problemas de los ciudadanos, en vez de mantener posturas obsoletas que reciben cada día que pasa menores cuotas de consenso público, como aquella que consiste en demonizar la perspectiva de la moneda única, culpando al euro de todos los males habidos y por haber.

Incluso más allá: ¿por qué los temas relativos a la seguridad en Europa, OTAN incluida, también constituyen tema intocable entre las fuerzas de izquierda de nuestro país? ¿No sería el fomento de una PESC como la definida arriba un posible campo de acción común?

Con esas premisas, parece evidente lo que podría constituir un *tercer objetivo del socialismo: conseguir que España actúe en el sentido de ir configurando ese nuevo orden internacional desde una UE fortalecida y renovada.*

En pura lógica, eso pasa porque nuestro país aplique una política exterior sustancialmente distinta a la actual, que nos está situando, a nivel mundial, entre los más fervientes seguidores del unipolarismo y de la mundialización desregulada, y a nivel europeo, entre los últimos bastiones del neoliberalismo y de la ausencia de impulso a la unión política.

La presente acción exterior de España, más allá de algunos temas concretos y muy específicos en los que merece ser saludada —como en el caso de la aproximación al contencioso de Gibraltar—, es de todo punto criticable en sus orientaciones de fondo y en sus aspectos concretos.

Valgan algunos ejemplos de posiciones especialmente negativas en el plano de las relaciones internacionales protagonizadas por el Gobierno del Partido Popular en los últimos tiempos:

- ninguna propuesta en cuanto a la reforma de las Naciones Unidas digna de mención;
- seguidismo respecto a las posturas norteamericanas en muchos temas de nivel regional (aún a riesgo de hacer descarrilar, incluso contra nuestros propios intereses objetivos, las relaciones bilaterales con Cuba);
- pleno apoyo y a palo seco al reforzamiento y ampliación de la OTAN (incumpliendo en nuestro caso las condiciones del referéndum de 1986);
- coincidencia con las doctrinas del FMI;
- rebaja cuantitativa de la cooperación al desarrollo y aprobación de una Ley inadecuada a las potencialidades del país y a las demandas de la ciudadanía en este capítulo;
- aislamiento en la Cumbre de Amsterdam sobre el dossier institucional;
- rechazo a un «gobierno económico» de la Unión;
- actitud inaceptable para un país con el 20 por 100 de paro en el Consejo Extraordinario de Luxemburgo sobre el empleo celebrado a finales de noviembre pasado.

Pienso que la política exterior del Gobierno de José María Aznar se hace claramente acreedora de una fuerte oposición desde el campo progresista y sería un error imperdonable guardar silencio en torno a ella por mor de considerarla un «asunto de estado».

Ahí está el caso de lo sucedido durante la última crisis entre los Estados Unidos e Irak.

El Gobierno ha situado a España, en esa coyuntura, entre los más fervientes partidarios europeos —junto al Reino Unido de Tony Blair, en el que desafortunadamente ha pesado más la tradición de privilegiar el tándem con Norteamérica que el programa del «nuevo laborismo»— de la estrategia del Presidente Clinton, favorable a una solución armada del contencioso generado en torno a asuntos de las inspecciones.

Y ello cuando esta crisis ha puesto sobre la mesa algunas cuestiones de sumo interés:

- que, tras casi una década de hegemonía norteamericana, los Estados Unidos se han quedado por primera vez en franca minoría respecto a sus aliados europeos y árabes, exactamente la textura opuesta a la Guerra de comienzos de 1991;
- que, entre otras razones, eso ha sido posible porque las opiniones públicas han cuestionado con claridad meridiana la bondad de las propuestas estadounidenses, quizás porque han percibido como más peligrosas una intervención occidental militar contra Irak que las supuestas capacidades de destrucción masiva en manos del dictador de Bagdad;
- que otras de las causas que ha motivado el aislamiento del Presidente Clinton ha sido el fracaso de su política hacia el Próximo Oriente, sobre todo después

de haber abandonado la postura equilibrada que adoptó con motivo de la firma de los Acuerdos de Oslo entre palestinos e israelíes, lo que ha convertido a los Estados Unidos en un factor imprescindible a tener en cuenta en la región, pero no de manera deseada como en aquel momento;

— que esas mayorías de opinión no sólo han pesado en la actitud de la mayoría de los gobiernos de la UE, sino que éstos las han alentado a fin de reforzar su discrepancia con el Departamento de Estado;

— que relevantes potencias europeas y mundiales, como Francia, han vuelto a situarse frente a las propuestas avanzadas por la Casa Blanca, algo que va convirtiéndose casi en una costumbre;

— que la Unión Europea se ha convertido de nuevo en un ejército en desbandada, cuya Presidencia semestral ha actuado de acuerdo a sus propios intereses (con el apoyo de algunas capitales como Madrid) y sin que nadie se haya acordado más que a *posteriori* de que existe sobre el papel un compromiso inscrito en los tratados de actuar con una voz coordinada a escala internacional;

— que la Federación Rusa ha pasado por primera vez factura de una ampliación de la OTAN que no le gustó en su momento pero que, a pesar de su opinión contraria, se llevó a efecto; Moscú, lo mismo que Pekín, ha hecho valer su peso internacional, desgastado por la fractura interna que vive el país pero ni mucho menos despreciable;

— que las Naciones Unidas, cuando Norteamérica actúa sin consenso, mantienen un espacio de influencia e intervención que, además, suscita consenso entre los ciudadanos y es reconocido como mínimo en la solución de conflictos de tipo regional.

Sobre esta última consideración construyó el PSOE, de forma muy inteligente, su oposición a la postura adoptada por el Gobierno de José María Aznar, mandando que cualquier intervención internacional que contara con el apoyo de España viniera precedida por el aval de una resolución explícita del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Considero que la necesidad de contestar políticas como la adoptada por la derecha respecto a esa crisis tendrían que alentar la convergencia de la izquierda en España, por supuesto que desde el debate y la diferencia, pero al mismo tiempo desde una voluntad constructiva de conseguir acuerdos de actuación.

Una convergencia que podría articularse de muchas formas, una de las cuales podría ser la celebración de unos «estados generales» en los que partidos, centrales sindicales y organizaciones no gubernamentales de carácter progresista pusieran en común sus propuestas en el campo de la acción exterior, que pueden ser muy coincidentes.

Esa convergencia no sólo es posible sino necesaria en el terreno de la acción exterior, en torno a esa *Agenda 2000* a la que me refería antes.

## La izquierda social y el futuro del socialismo

Esteban Ibarra

No voy a hablar de programas, voy a aproximarme a qué hacer y cómo, respondiendo a algunas preocupaciones planteadas como consecuencia de la fractura existente entre la izquierda política y los movimientos sociales, en una reflexión que efectúo desde un compromiso de izquierda social en el que llevo implicado muchos años. A la pregunta sobre qué es ser socialista, qué es ser de izquierda, creo que hay que responder desde un sentir, pensar y actuar anclado en los colectivos humanos que están sufriendo la explotación, opresión, injusticia, desigualdad o degradación ambiental de su hábitat. Responder desde esa posición a mí entender es importante, porque son unos tiempos, los nuestros, que exigen anclarse en lo esencial.

Se han mencionado grandes problemas que afectan a la sociedad actual, a saber, la concentración de la riqueza y el crecimiento de la pobreza, la producción y consumo antiecológico, la degradación ambiental, el paro estructural, la mundialización y la negación de la diversidad, la proliferación nuclear y la militarización del planeta, las situaciones de terrorismo, violencia e integrismo, etc., problemas que han supuesto respuestas diversas. Así, si la izquierda política y sindical organizó su respuesta, también en estos años hemos observado una eclosión de movimientos sociales y redes de ciudadanía, en general de ONG, que han reaccionado de una forma diferente. Esa diferencia ha consistido en múltiples ocasiones en que las organizaciones sociales han efectuado una intervención directa sobre los problemas, a veces con respuestas parciales, cuestión que se ha criticado en ocasiones y que hay que asumir, pero desde luego con una voluntad y esfuerzo orientado a no perder una perspectiva y un pensamiento más global, aunque las intervenciones sean locales o concretas. De estos movimientos sociales hay que mencionar, en los últimos treinta años, la intensa actividad del pacifismo, el feminismo, el ecologismo, las ocupaciones de viviendas vacías, la objeción de conciencia, el antirracismo, las radios libres y comunitarias, la cooperación al desarrollo, etc., y así una pléyade de respuestas sociales organizadas a los sucesivos problemas que ha ido planteando el desarrollo del capitalismo.